

DESPIDOS DE SANITARIOS EN VALENCIA

LOS trabajadores de la Sanidad valenciana se habían visto sorprendidos por el despido de 41 trabajadores de la Ciudad Sanitaria La Fe cuando volvieron al trabajo después del fin de semana. Doce de entre ellos eran enlaces sindicales y todos eran conocidos por defender los intereses de los sanitarios. El problema tenía su origen en el malestar reinante entre el personal debido al estado de suciedad en que se encontraban las cafeterías, cuyos empleados, por otra parte, llevan tres meses sin cobrar. Se empezaron a realizar reuniones y asambleas en el "hall" y los pasillos del centro para informar de la situación conflictiva de las empresas auxiliares que llevan estos servicios en la Ciudad Sanitaria. El día 6 de mayo, la Policía decidió intervenir, siendo llamado uno de los enlaces a la Dirección del centro, donde se le comunicó que estaba despedido. Inmediatamente, el Centro se solidarizó con el representante sindical, realizando una asamblea masiva de protesta, seguida de paro, aunque asegurando los servicios de urgencia. Los responsables de la Ciudad Sanitaria continuaron con los despidos hasta un número de 41, por lo que la semana siguiente se inició con asambleas y paros en todos los centros sanitarios de Valencia, en exigencia de la readmisión de los 41. Asimismo, todas las fuerzas de la oposición valenciana, las Asociaciones de Vecinos, Movimiento Democrático de Mujeres, Comisiones Obreras, etcétera, se han solidarizado con los despedidos, explicando el porqué de las acciones de los empleados sanitarios. En un escrito de las Comisiones de Sanidad, éstas señalan "que por no conscientes del papel social que jugamos en la sociedad, no hemos querido nunca llegar a situaciones de conflicto que repercutan en el resto de los trabajadores"... "si nos vemos abocados a tomar medidas más radicales, queremos aclarar a toda la ciudad valenciana que hacemos responsables de esta situación al INP, al doctor Evangelista —director del centro— y a las autoridades sindicales y gubernativas". ■



Euroforum: Por primera vez, obreros y empresarios juntos.

ENCUENTRO EMPRESARIOS-TRABAJADORES

Un paso de gigante

A mitad de los años sesenta, un empresario llamado Pedro Durán Farell, un hereje para la mayor parte de sus colegas, manifestó públicamente que a la hora de resolver los problemas laborales, con quien había de hablar era con Comisiones Obreras, que eran los que de verdad representaban a los trabajadores. Por aquel entonces, estas palabras fueron una auténtica bomba, y la reacción del Gobierno ante las mismas le costaron, en ese y en años sucesivos, mucho dinero a Durán Farell. Pero abrió brecha y poco a poco, tímidamente, en los diez años siguientes, algunos empresarios osados se fueron manifestando en el mismo sentido.

Lo que nadie soñaba por aquel entonces y muy pocos se atrevían a proponer seriamente hace menos de un año era que ese encuentro se iba a producir. Por parte obrera, nunca había habido problemas: desde el fondo del pozo siempre hay ganas de dialogar, cuando se es consciente de que no se va a perder la vergüenza ni la dignidad. Pero para los empresarios, descender a esos terrenos había sido siempre "indigno" y peligroso además.

Pero la celebración del "encuentro de Euroforum" entre unos cincuenta empresarios y representantes de Comisiones Obreras, Unión

Sindical Obrera y Unión General de Trabajadores, ocho por cada una de las tres organizaciones, demuestra que las cosas han cambiado en este sentido. Que las impresionantes movilizaciones de los meses de enero y febrero han hecho ver a los empresarios la fuerza y organización del movimiento obrero. Que la eventualidad de un cambio político puede traer a esas organizaciones a la escena pública, sin tapujos.

Esas y otras motivaciones —entre las que no debería excluirse la estricta pretensión de ver físicamente a esos dirigentes obreros— llevaron a la enorme mesa anular del encuentro a los empresarios. No estaban los grandes de la Banca ni de la industria, pero algunos aseguran que había "enviados especiales" de los mismos. Al principio, la iniciativa corrió a cargo de los obreros, que tenían más cosas que decir: los empresarios estaban tímidos, tal vez reticentes.

Y es que, frente a la cohesión por el mero hecho de estar organizados (aun cuando hubiera tres organizaciones distintas) que presentaban los dirigentes obreros, los empresarios aparecían individualizados, sin lazos de unión, aun cuando se sabe la solidaridad de clase que en momentos difíciles son capaces de poner en marcha. Les fallaba, como había ocurrido

desde hacía mucho tiempo, la Organización Sindical que pretende agruparlos. Comisiones Obreras había puesto como condición de su participación el que la OS no viniera. Y se aceptó.

Ese ya fue un primer detalle importante que venía a sancionar la superación real que en este terreno se produce. En las cuestiones previas, Comisiones obreras tampoco aceptó el "pacto social" como título genérico de los encuentros, aun cuando en el coloquio el tema fuera ampliamente debatido.

Cipriano García, López de Lacalle, Ariza, Sartorius, Luis Royo, Juan Muñoz Zapico (que presentó la ponencia), Eduardo Saborido y Rafael Pillado iban por Comisiones Obreras. Ciriaco de Vicente, Miguel Ángel Martínez, Jaime Montalvo, Jerónimo Saavedra y José A. Sarazibar, por UGT. Juan Ángel Arrea, Segismundo Crespo, Mariano Espúñez, José Barionuevo, Rafael Lacalle y Ramón Muñagorri por USO.

Bruno Trentin, de la CGIL y de la Confederación Unitaria italiana de Sindicatos abrió el debate, junto con José Bidegain, el revolucionario empresario francés de "Entreprise et Progrès". El primero trazó una perspectiva general y particularizada de las formas de negociación en Europa, analizando en especial la situación italiana (consejos de fábrica, negociación articulada, relación consejos-sindicato, la unidad sindical), concluyendo en la necesidad que la experiencia italiana demostraba de respetar, por ambas partes, los acuerdos entre empresa y trabajadores, sin caer, no obstante, en el pacto social, inadmisible. "El pacto social es algo más que instrumento técnico, dijo, es una formulación ideológica del neocapitalismo que dice no creer en la lucha de clases".

Bidegain, desde otro punto de vista, llegó a conclusiones muy similares. Aceptando la lucha de clases y entendiendo la tensión que se produce en la empresa como tensión dinámica, dialéctica y, por tanto, beneficiosa, el pacto social es contraproducente.

Por parte española, Comisiones Obreras, y su postura fue apoyada por las demás organizaciones, rechazó la posibilidad de un pacto social, pero señaló la voluntad del movimiento obrero de respetar los acuerdos alcanzados en la negociación, siempre y cuando se cumplieran dos condiciones: la representatividad de las partes y la posibilidad de que éstas puedan actuar libremente y el que las condiciones socioeconómicas en que se firme el

Un paso de gigante

acuerdo no varíen sustancialmente antes del final del período de vigencia del mismo.

Pero aquí todas las organizaciones señalaron las limitaciones del contexto político. De un lado, en cuanto a la representatividad: la Organización Sindical no vale en este sentido. De otro, en cuanto a los condicionantes políticos de la negociación en un país no democrático. De ahí la necesidad de ir a un pacto político entre fuerzas representativas de los trabajadores y los empresarios para restablecer la democracia.

Bien porque no lo tuvieron muy elaborado o bien porque estuvieran de acuerdo en estas formulaciones, los empresarios no replicaron a estos planteamientos. Manifestaron solamente una cierta ansiedad por saber si las organizaciones obreras estarían dispuestas a respetar los acuerdos, a atenerse a unas ciertas normas en el conflicto, y al parecer la respuesta antes señalada les satisfizo.

Hubo más desacuerdo en el tema de las condiciones de la negociación. Para empezar, los empresarios plantearon que en sus empresas existían enlaces representativos que no pertenecían a ninguna organización, realidad que no tuvieron reparos en reconocer las organizaciones sindicales. Más adelante plantearon su desacuerdo en la revocabilidad de los cargos, con el hecho de que los representantes tuvieran que consultar a las asambleas antes de tomar decisiones, y con la forma de coacción que, en su opinión, suponía el voto a mano alzada.

Fue un tema controvertido: primero, porque las organizaciones obreras no habían planteado ni iban a plantear cómo tenían que funcionar los sindicatos patronales, y segundo, porque, salvo en el tema del voto secreto —que podría aceptarse— la revocabilidad de los cargos y el mecanismo asambleario son temas intocables para el movimiento obrero.

El empresario vasco Fernando Bianchi planteó una cuestión clave: ¿Están dispuestas las organizaciones obreras a respetar la democracia? "La democracia no es una mera salida táctica, sino un principio para el movimiento obrero", se le contestó. "Volveremos a la oposición si democráticamente los acontecimientos nos llevan a esa situación y además nos opondremos con todas nuestras fuerzas a

LAS OPCIONES ECONOMICAS DE LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA

LA eventualidad de un próximo cambio político está agudizando el interés de los partidos de izquierda hacia los problemas económicos de la coyuntura actual. Todos están interesados en dar alternativas, en proporcionar respuestas técnicas y de política económica, en contestar fundamentadamente la actuación del Gobierno. El nivel de elaboración de estas alternativas es en algunos casos todavía primario, pero los partidos están empeñados en poner a punto en breve sus análisis y sus soluciones.

Estas podrían ser las conclusiones, junto con las ya elaboradas respecto a problemas concretos, que se desprenderían del coloquio que la pasada semana se celebró en Madrid entre representantes de siete partidos (Federación Popular Democrática, Izquierda Democrática, Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista Popular, Partido Comunista, Partido del Trabajo y Federación de Partidos Socialistas) y los periodistas económicos agrupados en APIE.

¿Tienen ustedes un programa económico? fue la primera pregunta formulada por los periodistas, y de las contestaciones se desprende que todos los partidos han creado su comisión económica y que éstas analizan de un lado los problemas de la novísima coyuntura actual y la política económica del Gobierno y, de otro, elaboran soluciones a corto plazo —en la perspectiva de una etapa de transición a la democracia— y a medio plazo, con objeto, en algunos casos, de revisar los programas económicos, alguno de los cuales datan ya de varios años.

A corto plazo, las propuestas de los partidos son coincidentes en un extremo: hay que distinguir dos etapas en el proceso democrático. La primera, de transición, con la apertura de un proceso

constituyente y la plena participación de todas las opciones políticas en el juego democrático. Y la segunda, de asentamiento de la democracia, una vez que las instituciones estén funcionando a pleno ritmo y la nueva situación política se haya normalizado.

Respecto a la primera etapa, la postura del PC —representado por José Sandoval— fue clara: las transformaciones económicas han de ser mínimas, con el fin de evitar enfrentamientos durante esa etapa, que podrían poner fin al experimento democrático. "No debe Portugalizarse la situación". Por tanto, nada de nacionalizaciones, que fue el tema en el que se centró la discusión sobre este extremo. PT, Izquierda Democrática y FPS coincidieron netamente con dicha apreciación. No así el PSOE, quien —a través de Luis Gómez Llorente y Miguel Boyer— afirmó que la sola presencia de los partidos de izquierda en el juego político, y eventualmente en el Gobierno, determinaría un retraimiento de la inversión. Huelga de inversores" la denominó más adelante Enrique Barón, representante de FPS, quien tampoco se mostró partidario de cambios profundos en la primera etapa, que harían inevitable el control de las instituciones financieras por parte del Estado vía nacionalizaciones.

Sin duda, junto con las aportaciones concretas sobre temas como el paro —cuya solución, a través de distintas medidas, en las que la primacía de la inversión pública favorecida por un contexto democrático era el elemento determinante, todos los partidos consideran fundamental— la orientación general de la política económica —¿reformas estructurales o no?— fue uno de los temas cruciales del coloquio, con las posturas que hemos señalado.

Hubo menos polémica de lo que se esperaba respecto de otro

tema crucial en el corto plazo: el pacto social. El acuerdo a este respecto, por lo menos parte de quienes manifestaron su opinión sobre este problema, fue claro: no es posible un pacto social sin un previo pacto político que restablezca la democracia. Y una vez que esto haya ocurrido, el pacto social no puede ser una paralización del movimiento obrero, una enajenación de sus armas —la movilización a todos los niveles—, sino el establecimiento de un contexto de acuerdos para regular la marcha de las empresas y de la economía: para que esto pueda ocurrir es absolutamente necesaria la democracia.

Luis Larroque, de Izquierda Democrática, avanzó un tema que, además de su militancia concreta, le preocupaba como empresario: la posibilidad de una flexibilidad de las plantillas, en un contexto en el que los seguros de desempleo respondieran realmente a las necesidades de consumo de los trabajadores, tema que, desde otra perspectiva, había abordado antes Miguel Boyer, al criticar la orientación de la actual política económica del Gobierno, señalando que no es por el camino de fomentar la inversión como se va salir de la crisis. "Mientras no se tomen medidas para impulsar el consumo, no habremos cambiado la orientación. Y no cabe esperar a que el consumo se reactive como consecuencia de un aumento de la inversión".

A la espera de que esa opción de política económica alternativa adquiera una configuración unitaria de toda la oposición, el coloquio de Madrid demostró la unanimidad respecto a algunos de los temas fundamentales. Hubo más convergencias que divergencias. Y ello, junto al hecho de saber que los partidos de izquierdas tienen programas económicos, es importante. ■ G. E.

cualquier intento de derrocar un régimen democrático".

Otra preocupación empresarial manifestada fueron los conflictos por causas extrasalariales. Y la conclusión del problema fue compartida por ambas partes: mientras no haya libertades democráticas estas interferencias, en sus manifestaciones más dramáticas, no podrán ser evitadas.

En este sentido, y para la etapa previa a la democracia, Julián Ariza

propuso cinco condiciones que habrían de normalizar en parte las relaciones en la empresa: la amnistía laboral (esto es, la readmisión de despedidos), la voluntad de diálogo por ambas partes, la clarificación de la situación económica y contable de las empresas, la permisión de asambleas y el compromiso de no reprimir laboralmente a los trabajadores por motivo de conflictos o por su lucha por la democracia.

Es el reto planteado a los empresarios: ¿Que porcentaje estaría dispuesto, en una perspectiva democrática a aceptar dichas condiciones? Es posible, incluso, que a alguno de los asistentes al encuentro de Euroforum se le llame incoherente o incluso traidor. Así están las cosas. Pero el interés de la reunión radica que es un primer paso, una especie de paso de gigante. ■ CARLOS ELORDI. Foto: GUSTAVO CATALAN.